



Señor:
ADMINISTRATIVO ORAL DE BUGA.
E. S. D.

REF: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

HAROLD MAURICIO GARCIA ACEVEDO mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, abogado en ejercicio, obrando en nombre y representación del señor **HARRY ANDRES RIVADENEIRA TORRES** muy respetuosamente acudo a su despacho para presentar Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con la finalidad de lograr que se restablezcan los derechos fundamentales vulnerados como lo son a la dignidad humana, a la igualdad, el derecho al trabajo y al debido proceso vulnerados en el tramite contravencional de transito del cual se desprenden en primera instancia la **Resolución Nro. STTM-2100-2015-03220 de fecha de 06 Mayo de 2015**, mediante la cual se declara a mi poderdante contravencionalmente “responsable por la violación al reglamento de tránsito en su artículo 131 Capitulo II Título IV de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 4 de la ley 1696 de 2013, infracción No. F la cual corresponde a CONDUCIR BAJO EL INFLUJO DE ALCOHOL O BAJO LOS EFECTOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. CONDUCTA SANCIONADA CON LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 152 DE ESTE CÓDIGO”; y en segunda instancia la **Resolución número STTM-07016 del 22 de julio de 2015 “POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION”**. Convocando a la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA - SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE**, representada legalmente por el señor **JULIAN ANDRES LA TORRE HERRADA**, o por quien haga sus veces en ausencias temporales y definitivas, por la presunta violación al debido proceso y demás garantías que la Honorable Corte constitucional ha esgrimido sobre el tema, el incumplimiento de los protocolos establecidos por medicina legal para realización de la prueba de embriaguez, la inobservancia del criterio de la sana critica del acervo probatorio, la negación tacita de la contradicción de la pruebas, y el incumplimiento a la Constitución Nacional, y a la ley 1437 de 2011, los cuales procederé a demostrar en los siguientes hechos:

HECHOS.

PRIMERO: Mi cliente el señor **HARRY ANDRES RIVADENEIRA TORRES**, identificado con cedula de ciudadanía número 14.897.860 de Buga (V), persona mayor de edad, padre de familia, y conductor de vehículo de servicio público desde hace más de veinte años, y el día 29 de noviembre del año 2014, como de costumbre desde muy tempranas horas de la mañana salió en su vehículo asignado (taxi) a laborar, jornada que se extendió hasta pasadas las diez de la noche de la misma calenda.



SEGUNDO: Mi cliente el señor **HARRY ANDRES RIVADENEIRA TORRES**, tras una jornada de más de doce horas de trabajo en la ardua labor de la conducción del vehículo (taxi), ingirió una bebida gaseosa energizante comercialmente conocida con el nombre de **RED BULL**, porque debía de ir al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira a recoger a su hermana que llegaba de viaje. (El Boucher original del tiquete aéreo reposa en el expediente contravencional de la secretaria de transito).

2

TERCERO: Mi cliente el señor **HARRY ANDRES RIVADENEIRA TORRES**, estando en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira, en la sala de espera, ingirió una segunda bebida gaseosa energizante comercialmente conocida con el nombre de **RED BULL**. Debido a la fatiga, puesto que al encontrarse en total reposa en la sala de espera esperando el decolarse de avión donde viajaba su familiar se estaba quedando dormido.

CUARTO: Mi cliente el señor **HARRY ANDRES RIVADENEIRA TORRES**, al llegar a su domicilio ubicado en la ciudad de Buga, en compañía de su hermana, ceno en familia, debido a que horas antes no había ingerido alimento alguno, pues solo se había hidratado, y posteriormente sale de su casa a eso de las 3:30 de la madrugada a guardar al parqueadero el vehículo (taxi) de su propiedad el cual aún está pagando, y es su fuente de empleo y de sustento familiar; en razón a que en pocas horas amanecería y debía de iniciar la nueva jornada laboral.

QUINTO: El día 29 de Noviembre del año 2014, entre las tres y treinta (3:30) y cuatro (4:00) de la madrugada, mi poderdante, atiende una señal de detención que realiza la autoridad, y después de entregar los documentos del vehículo y su identificación al agente de tránsito con placa número 021 URIEL SANCHEZ SATISABAL quien se encuentra privado de la libertad por varias conductas punibles relacionados con su cargo en razón a irregularidades en procesos contravencionales de alcoholemia; lo requerido para la práctica de la prueba de alcoholemia con alcohosensor, a lo cual mi poderdante acepto sin resistencia. Puesto que como se ha reiterado mi representado solo ingirió esa noche dos bebida gaseosa RED BULL, pero al percatarse el agente de tránsito que no portaba en ese instante el mencionado dispositivo para realizar la prueba sin mediar palabra, dirigió a mi representado a la CLÍNICA GUADALAJARA de la ciudad de Buga, para que le realizaran un examen clínico que determinara el grado de alcoholemia.

SEXTO: Para la misma calenda, y después de haber transcurrido hora y media aproximadamente, a las cinco y diez (5:10) de la mañana, el medico perito DANILO LADINO con registro medico 76-7720, diligencio un formato de la Policía Nacional, donde concluye "paciente admite haber tomado par de tragos", y diagnostica grado 1. Dejando muchísimos vacíos o lagunas, puesto que no especifica si los tragos son de bebidas alcohólicas,



alucinógenas, medicamentos homeopáticos, clínicos, simplemente de agua; pasando por alto entre otras cosas el cumplir con los protocolos establecidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal, en cumplimiento de la resolución 00414 de 2002, y omitiendo en la anamnesis lo manifestado por mi cliente en lo concerniente a problemas físico que desde siempre le han impedido caminar derecho, mantener el equilibrio, por esta razón sus amistades lo conocen con el sobrenombre de CHONETO.

3

SÉPTIMO: Mi representado una vez conoció en resultado del examen clínico, solicito al médico perito que reconsiderara los resultados del dictamen, que se encontraba en desacuerdo, pero tal suplica no tuvo eco ni en él perito, ni tampoco en el agente de tránsito, quien procedió a inmovilizar el vehículo de placas VMA 801, y realizo la orden de comparendo único nacional número 76111000000008894280, sin explicarle a mi cliente que por mandato legal y jurisprudencial de la Corte Constitucional en ese momento podía solicitar que le practicaran otros tipos de prueba de alcoholemia tales como nuestras de sangre, y el alcohosensor, repetición del examen clínico por otro perito médico, a fin de tener como controvertirlo y obtener la certeza sobre los hechos ocurridos.

OCTAVO: El día tres (3) de diciembre del año dos mil catorce (2014), mi defendido radico en la secretaria de Tránsito y Transporte el formato de solicitud de audiencia pública para que se inicie el proceso contravencional, motivado por la inconformidad en el procedimiento de la orden de comparendo único nacional número 76111000000008894280.

NOVENO: De manera extraña e incomprensible a luz del derecho, y con una conducta presuntamente prevaricadora sin haberse aun realizado la audiencia contravencional del artículo 136 de la ley 769 de 2002, la inspectora del tránsito y transporte de la ciudad de Guadalajara de Buga, mediante oficio de fecha 18 de diciembre de 2014, le solicita al señor gerente de la UT SITT BUGA que suspenda la licencia de conducción de mi defendido, y que ordene que se genere y elabore la misma. Hecho que genera una serie de interrogantes su señoría, tales como:

- a) ¿Qué valides tienen las pruebas, y en general toda la actuación administrativa para que la autoridad de tránsito y transporte de la ciudad de Guadalajara de Buga, si antes de que se realice la audiencia del proceso contravencional, los terceros particulares (UT SITT BUGA), generan resoluciones declarando a los conductores responsables de las faltas al código de transito que se les atribuyen, y esta secretaria las avala, las notifica y las ejecuta?.
- b) ¿Es acaso la audiencia contravencional un lleno de requisitos para legalizar los actos administrativos sancionatorios emanados por la Secretaria de tránsito y transporte de la ciudad de Guadalajara de Buga, en contra de los presuntos infracciones a la ley 769 de 2002, desconociendo el derecho fundamental al debido proceso?.



- c) ¿Existe valoración en conjunto de las pruebas, y se aplica el principio de la sana critica, o solo es prevalente la orden única de comparendo presentada por el agente de tránsito, y/o testimonio?

DECIMO: El cuestionado oficio SSTM-2100-2014 suscrito por la inspectora de Tránsito y Transporte del municipio de Buga dentro de las observaciones, comunica que mi defendido se ha presentado ante su despacho a definir la situación contravencional, y que para los fines pertinentes hace entrega de la relación de entrega de comparendos de **fecha 2 de diciembre de 2014**, lo cual no concuerda con la realidad, puesto que dicho formato de entrega que realizo el agente de tránsito **URIEL SANCHES** tiene como fecha de radicado el **2 de NOVIEMBRE de 2014, a las 4:41 de la tarde**, es decir 27 días antes de la presunta contravención de tránsito imputada a mi cliente; el cual fue recibido por la señora inspectora de tránsito y transporte de la ciudad de Buga en la calenda del **23 de diciembre de 2014 a las 2:30 pm**, es decir, en fecha posterior al oficio remitido. Por otra parte su Señoría, el aludido documento dice claramente que la orden de comparendo único nacional número 76111000000008894280, fue radicada en original el día 11 de diciembre de 2014, cuando el ley 769 de 2002, **establece un máximo de 12 horas**.

DICIMO PRIMERO: El día treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil catorce (2014), se dio inicio a la audiencia pública del proceso contravencional número 58908, en donde mi defendido el señor HARRY ANDRES RIVADENEIRA TORRES, nuevamente manifestó a las autoridades de transito lo siguiente:

- a) Que no ingirió licor el día 29 de noviembre de 2013.
- b) Que el agente de tránsito ni el perito médico le informaron de forma precisa y clara (i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, las diferencias entre ellas y la forma de controvertirlas.
- c) Que aun solicitando la reconsideración del examen médico, no le permitieron practicarse otro que le diera la oportunidad de controvertir y desvirtuar el existente.
- d) La petición reiterada de que lo exoneren de la infracción de tránsito impuesta.

DECIMO SEGUNDO: En virtud de lo manifestado por el mi cliente la secretaria de transito considero conducente y pertinente decretar la prueba testimonial del señor agente de tránsito URIEL SANCHEZ SATISSABAL identificado con la placa 021 y la del perito médico DANILO LADINO TAPASCO con RM 76-7720.



DECIMO TERCERO: El día 3 de marzo del año 2015, la señora Inspectora de Tránsito Municipal de Buga, dentro del proceso contravencional Nro. 58908, adelantado en contra del señor **ALBERIRO HINCAPIE SANCHEZ**, de acuerdo a la orden de comprendo Nro. 76111000000008894280, tomo la declaración juramentada al agente de tránsito **URIEL SANCHEZ SATISABAL**, identificado con cedula 94.460.370, expedida en Cali (V), quien declaro lo siguiente:

5

- a) Que para la calenda del 29 de noviembre se encontraba realizando labores de patrullaje desde la noche anterior cuando recibe el llamado de la Policía Nacional donde le informa que en la carrera 10 con calle 17, habían detenido a un conductor por presunta embriaguez.
- b) Los documentos del vehículo se encontraban al día.
- c) Que no contaba en ese momento con alcohosensor "...procedí a llevarlo junto con un compañero a la clínica **URGENCIA MEDICAS**, con el fin de que allí un médico de dicha institución le realizara un dictamen de conformidad como lo establece la ley...".
- d) "...Al realizarle la prueba dicho médico, me entrega un dictamen el cual arrojo un resultado positivo en grado (1), razón por la cual de inmediato procedí a inmovilizar el vehículo y elabore el respectivo comparendo..."
- e) Finalmente agrega el testigo en su declaración que se ratifica en el comparendo, puesto que fue elaborado según lo arrojado por el dictamen médico realizado en la clínica **URGENCIAS MEDICAS**.

Es importante resaltar que el agente de tránsito está seriamente confundido, equivocado por dos razones esenciales que no fueron tenidas en cuenta al momento de realizar la valoración de las pruebas, toda vez que el nombre mi defendido dentro del presente proceso contravencional es HARRY ANDRES RIVADENEIRA TORRES y no el de **ALBERIRO HINCAPIE SANCHEZ**. Por otra parte mi cliente fue llevado a la clínica Guadalajara para que se le realizar la prueba de alcoholemia y no a la **CLÍNICA URGENCIAS MEDICAS**, tal como lo afirma erróneamente el agente de tránsito reiteradamente.

DECIMO CUARTO: El día 6 me de Mayo del año 2015, la secretaria de tránsito y transporte de la ciudad de Buga, profirió el acto administrativo **STTM-2100-2015.03220**, declarando **contravencionalmente responsable**, por la violación al reglamento de tránsito en su artículo 131 Capitulo II Título IV de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 4 de la ley 1696 de 2013, infracción No. F la cual corresponde a **CONDUCIR BAJO EL INFLUJO DE ALCOHOL O BAJO LOS EFECTOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. CONDUCTA SANCIONADA CON LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 152 DE ESTE CÓDIGO**, a mi representado.



DECIMO QUINTO: El señor **HARRY ANDRES RIVADENEIRA**, es notificado del recurrido acto administrativo el día 8 de mayo de 2015.

DECIMO SEXTO: El señor **HARRY ANDRES RIVADENEIRA**, contrato los servicios profesionales del suscrito y dentro del término legal de diez se interpuso el recurso de apelación contra la Resolución Nro. STTM-2100-2015-03220 de fecha de 06 Mayo de 2015, mediante la cual se declara a mi poderdante contravencionalmente “responsable por la violación al reglamento de tránsito en su artículo 131 Capítulo II Título IV de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 4 de la ley 1696 de 2013, infracción No. F la cual corresponde a conducir bajo el influjo de alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Conducta sancionada con las multas establecidas en el artículo 152 de este código”. Recurso aceptado y en virtud del mismo, ordeno practicar pruebas decretadas que no practicadas en la primera instancia del trámite administrativo.

DECIMO SEPTIMO: En la calenda del 25 de junio de 2015, se llevó acabo la audiencia para escuchar en versión libre, solicitar la aclaración del dictamen y contrainterrogar al médico **DANILO LADINO TAPASCO**, galeno que realizo la prueba médica de embriaguez a mi defendido.

DECIMO OCTAVO: Dentro de la aclaración y ampliación del dictamen del médico **DANILO LADINO TAPASCO**, solicitada por la servidora pública de la secretaria de transito es importante resaltar lo siguiente:

- a) El profesional de la salud a muchas de las preguntas realizadas por la servidora pública de la entidad accionada dio como respuesta, **no recuerdo, no estoy seguro**, si lo escribí es porque considere importante, entre ellas cuando le preguntaron qué tragos y cuantos tomo el señor Rivadeneira, el galeno respondió “**no, no recuerdo**”
- b) Cuando se le pregunto al galeno que en caso específico que pruebas le fueron practicadas para determinar el grado de embriaguez, el medico contesto “...no recuerdo solo esta lo que marque en la prueba de embriaguez...”.
- c) El galeno dijo en la audiencia que el dictamen lo diligencio parcialmente, debido a que el encabezado del dictamen, fecha y horas de los hechos, no fueron diligenciadas por éste, y que él solo diligencio el acápite del examen médico.
- d) Cuando se le pregunto al galeno si para el caso en concreto de realización de pruebas clínicas, es necesario realizar pruebas de laboratorio para determinar el estado de embriaguez de una persona, el galeno contesto “**nosotros manejamos el grado de embriaguez y no manejamos pruebas de laboratorio**”. Desconociendo derechos constitucionales de los pacientes máxime cuando se le manifestó por



parte de mi mandante que no estaba de acuerdo con el resultado del dictamen.

DECIMO NOVENO: Dentro de la aclaración y ampliación del dictamen del médico DANILO LADINO TAPASCO, solicitado por togado de la defensa en la audiencia del pasado 25 de junio de 2015 es importante resaltar lo siguiente:

7

- a) Le pregunte al galeno que le informara al despacho en que documento o formato había realizado la prueba de embriaguez, a la cual contesto que en un formato que le había entregado el agente de tránsito. Recordemos que para el caso en concreto, **el medico reconoció que el diligencio parcialmente el documento.**
- b) Cuando le pregunte al profesional de salud que informara si él había diligenciado el formato de protocolo guía para el informe pericial sobre determinación clínica forense de embriaguez el cual es emitido por el instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses, y le exhibí en audiencia el mencionado formato, el galeno contesto **“NO diligencie el formato que me muestra el abogado, solo diligencie el formato que me facilito el guarda de transito”.**
- c) Cuando le pregunte al médico si había ordenado exámenes de laboratorio al mi cliente, él respondió **“NO”**, desconociendo nuevamente de forma tácita el derecho de contradicción de las pruebas, y sus garantías constitucionales.
- d) Cuando le pregunte al médico que si le había explicado a mi cliente los derechos que tenía para objetar la prueba realizada, tal como lo establece la corte constitucional en la sentencia C-633 de 2014, el interrogado respondió **“NO”**. Nuevamente vulnero de forma tácitamente sus derechos fundamentales y desconoció sus garantías constitucionales.
- e) Cuando le pregunte al profesional de la salud que dijera al despacho de manera asertiva (si o no), si había dado la opción o la oportunidad de apelar el resultado de la prueba, el galeno evadió la respuesta y respondió **“sólo realicé el examen físico que se me solicito”**
- f) Cuando le pregunte al médico si el realizo historia clínica, el interrogado respondió que **“NO RECUERDO”**. Siendo ello una obligación, según los lineamientos del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses; y como se evidencia en el acervo probatorio el trámite administrativo, a mi representado no le abrieron historia clínica cuando le realizaron el examen clínico de embriaguez.
- g) Cuando le pregunte al médico si él solicito el consentimiento informado para la práctica del examen clínico, el interrogado respondió que **“NO**



RECUERDO". Es decir una vez más abuso de su cargo y vulnero los derechos fundamentales de mi defendido.

- h) Cuando le pregunte al médico si tomo la huella dactilar y la dejo impresa en el formato de consentimiento informado para la práctica del examen clínico, el interrogado respondió que **"NO RECUERDO"**. Cuando la evidencia demostró que no hubo historia clínica ni diligenciamiento del formato de consentimiento informado para la práctica del examen clínico de embriaguez.
- i) Cuando le pregunte al médico si él le explico a mi cliente el señor Rivadeneira de forma clara los objetivos del examen de embriaguez, le resolvió las inquietudes, antes durante y después del examen, toda vez que mi poderdante padece de incoordinación motora y aumento del polígono de sustentación. El interrogado respondió **"NO RECUERDO"**. cuando nunca lo hizo, pues recordemos que el medico solo se dedicó a realizar un examen y a diligenciar un formato de forma parcial.
- j) Cuando le pregunte al médico si él había indagado sobre las actividades en el día realizadas por mi cliente el señor Rivadeneira momentos previos a la realización del examen. él interrogado respondió que **"NO RECUERDO"**.
- k) Cuando se le pregunta que le informe al despacho en que clínicas ha laborado en la ciudad de Guadalajara de Buga, el interrogado respondió que solo en la clínica Guadalajara.

VIGÉSIMO: Su Señoría de lo anterior se evidencia que el Medico Perito No Diligencio El Formato De Consentimiento Informado. Es importante resaltar que para la práctica del examen clínico o de las pruebas paraclínicas complementarias (incluyendo toma de muestras biológicas), se requiere el consentimiento libre e informado de la víctima, o de su representante legal si esta fuere menor de edad o incapaz o del contraventor. El consentimiento debe ser escrito y debe ir precedido de una explicación sobre los procedimientos que se van a efectuar y el objetivo de los mismos. En el evento en que la persona por examinar, o su representante legal, se rehúse a la práctica del estudio, se requiere una orden emitida por un Juez de Control de Garantías para su realización.

VIGÉSIMO PRIMERO Su señoría, en los anteriores hechos se evidencia claramente las múltiples fallas del dictamen pericial por la negativa de cumplir con los Protocolos Guías Para El Informe Pericial Sobre Determinación Clínica Forense De Embriaguez; las cuales me permito enunciar:

- a) El medico perito debe hacer seguir a la persona por examinar al lugar donde se realizará la prueba; saludarlo y presentarse informando el nombre y apellido y registro médico; observar desde su ingreso la



apariciencia, actitud, conducta y movimientos de la persona, como parte del examen.

- b) No se tomó huella dactilar, Es de anotar, que los peritos médicos que realicen el examen clínico y/o paraclínico para determinar embriaguez, deben tomar directamente en todos los casos la huella dactilar de examinado (ver numeral 2.4.5 de la guía práctica forense)
- c) El medico perito no explico que el procedimiento del examen a mi cliente para que este entendiera el mismo y sus objetivos sus objetivos, resolviendo cualquier inquietud.
- d) Fallas en la entrevista, no preguntaron por los antecedentes médicos, psiquiátricos, farmacológicos, mi poderdante tiene antecedente de alteración en la marcha, por lo que tenía incoordinación motora y aumento del polígono de sustentación. En la entrevista inicial de la persona por examinar permite obtener información sobre las condiciones y circunstancias que rodearon y generaron la solicitud del examen de embriaguez, así como sobre los antecedentes médicos, psiquiátricos, farmacológicos y toxicológicos, de importancia para orientar el procedimiento y la interpretación de los resultados. A su vez, hace posible ir explorando algunos aspectos del área neurológica y mental del individuo. Es importante resaltar que a mi poderdante no le preguntaron la ocurrencia los hechos, prueba de ello es que en el ítem de conclusiones del formato de la Policía Nacional de embriaguez, **el cual no es el establecido por el Instituto de Medicina Legal**, se observa se escribió **“admite haber tomado 2 tragos”** pero no indican cual sustancia, a qué hora ,no preguntan qué síntomas tiene como insomnio, hipersomnia, disforia, escalofríos, cefalea, diplopía, palpitaciones, aumento o disminución del apetito, polidipsia, hipo, dolor abdominal, mareo, náuseas, vómito retención urinaria, aumento de diuresis, entre otros. En caso de ser así, se deben registrar y tener en cuenta durante la realización del examen, así como en el análisis e interpretación de los hallazgos.
- e) No preguntaron sobre las actividades desarrolladas por mi representado durante las horas inmediatamente anteriores a tales hechos; entre otros, es importante conocer si estuvo sometido a un periodo prolongado de vigilia previamente.
- f) No preguntaron a mi defendido sobre antecedentes médicos especialmente los relacionados con trastornos que comprometan el equilibrio, la sensopercepción, la coordinación motora, la convergencia ocular o produzcan otros signos clínicos que deban ser considerados en el diagnóstico diferencial de la embriaguez.
- g) No preguntaron por antecedentes farmacológicos, medicamentos como insulina hipoglicemiantes, antiepilépticos, antivertiginosos,



antihistamínicos, y otros que deban ser considerados en la interpretación de los hallazgos del examen.

- h) No toman los signos vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura corporal). Además, cuando sea posible, es deseable registrar la talla y el peso del examinado, y examinar los reflejos osteotendinosos (por lo menos el rotuliano).
- i) Se debió solicitar pruebas complementarias porque en el informe que pasa el medico esta anotado que había consumido 2 tragos pero no dicen de que, cuando el señor había consumido 2 RED BULL.
- j) Como no se hizo una historia clínica adecuada el medico no supo que el señor tiene antecedente medico de alteración en la marcha, por ende no pudo haber sido por consumo de alguna sustancia. Algunos criterios a tener en cuenta para solicitar las pruebas complementarias, incluyen inconsistencias entre el relato del examinado y los hallazgos del examen, necesidad de aclarar un diagnóstico diferencial con otras entidades patológicas, antecedentes médicos, psiquiátricos, farmacológicos y toxicológicos, que podrían dificultar el diagnóstico de embriaguez y/o su etiología.
- k) Si no se disponía de un alcohosensor se podían haber realizado muestras de sangre y de orina. Ante la sospecha de embriaguez de origen etílico o del consumo combinado de etanol y otras sustancias si se dispone de un alcohosensor se puede determinar alcoholemia por este método indirecto, y se tomarán muestras de sangre y orina para estudio de psicofármacos; la otra opción es tomar muestras tanto de sangre, como de orina, para alcoholemia y análisis de otras sustancias en el laboratorio.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Su señoría, cuando la entidad accionada, con posterioridad pasa a pronunciarse sobre los aspectos que fueron objeto de inconformidad a lo largo del recurso impetrado, concluye lo siguiente:

- A) Que mi cliente o el suscrito no aportaron prueba de haber ingerido la bebida gaseosa RED BULL la noche del 29 de noviembre del año 2.014, calenda en que ocurrieron los hechos que generaron el comparendo por embriaguez, desconociendo que mi defendido a lo largo de todas las instancias lo ha reiterado en sus declaraciones bajo la gravedad del juramento, atentando de esta manera contra el derecho fundamental de la buena fe, pues recordemos que la misma se presume, y para la autoridad de transito del municipio de Guadalajara de Buga tal derecho constitucional y legal no se reconoce; y lo encubre con el argumento de que el galeno cuando dio contestación al interrogatorio para aclarar el dictamen objetado, dijo **"NO RECORDABA"**, si mi defendido había manifestado durante la prueba clínica de embriaguez si había tomado o no bebida gaseosa RED BULL. creándose una gran duda sobre la



veracidad de la ingesta de la bebida gaseosa, pero resolviéndola la administración municipal en su favor, para poder sancionar contravencionalmente a mi cliente y recaudar el dinero de la multa en sus arcas. desconociendo que es obligación de las conservar la cadena de custodia de los elementos incautados, y para el presente caso, no se incautó en posesión de mi defendido, sustancias que contuvieran alcohol, ni mucho menos la bebida gaseosa que acepta mi poderdante en haber ingerido.

- B) La entidad Accionada también llega a la conclusión que de conformidad con la resolución 000414 del 27 de agosto del 2002, **"Por la cual se fijan los parámetros científicos y técnicos relacionados con el examen de embriaguez y alcoholemia"**. aclarada mediante la resolución 000453 de 2002, expedidas por el Instituto Colombiano de medicina Legal y Ciencias Forenses; que nada impide que el agente de tránsito al no contar con alcohosensor, pudiera llevar a mi defendido a la clínica Guadalajara para que se le practicara el examen clínico de embriaguez, cuestión que no se discute. Pero desconoce la Accionada, los lineamientos protocolarios establecidos por la **RESOLUCIÓN No. 001183 del 14 de Diciembre de 2005, "Por medio de la cual se adopta el REGLAMENTO TÉCNICO FORENSE PARA LA DETERMINACIÓN CLÍNICA DEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ AGUDA"** que también han sido establecidos por Instituto Colombiano de medicina Legal y Ciencias Forenses, así como lo ordenado en la Sentencia C-633 de 2014, de la Honorable Corte Constitucional, en lo referente a las garantías que deben existir para la práctica de la prueba de embriaguez. Es decir su señoría, La Secretaria de Tránsito y transporte del municipio de Guadalajara de Buga, solo invoca y se acoge a las normas jurídicas que le benefician en aras de sancionar ilegalmente a los administrados, y desconoce a raja tabla todas aquellas que favorecen a los presuntos contraventores.
- C) El galeno no recuerda que tipo de tragos presuntamente ingirió mi defendido (alcohol, aguas, gaseosa, aromática), pero que el considero importante escribir en el dictamen parcial que diligencio que el señor Rivadeneira había ingerido dos tragos; así a secas sin explicación. y como para él fue suficiente, no ordeno examen de laboratorio porque en la clínica donde laboraba no manejaban este tipo de exámenes. y por no existir otra prueba pese a la inconformidad de mi defendido, La Secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de Guadalajara de Buga, decide que con esta valoración probatoria es suficiente y decide confirmar la resolución de primera instancia que declara contraventor, a mi poderdante.

VIGÉSIMO TERCERO: En la calenda del 10 de noviembre de 2015, se radico solicitud de conciliación bajo el radicado 403515-2015, ante la Procuraduría 60 Judicial I Para Asuntos Administrativos, la cual una vez admitió la solicitud, fijo hora y fecha para la audiencia de conciliación.



VIGÉSIMO CUARTO: El día 28 de Enero de 2016, a las 11:00 AM, se dio inicio a la audiencia de conciliación en el despacho del señor Procurador 60 Judicial I Para Asuntos Administrativos, la cual fue fallida porque la falta de amino conciliatorio de la entidad convocada.

PRETENCIONES.

12

PRIMERO: Solicito respetuosamente, que su Señoría ordene el restablecimiento de los derechos constitucionales al Debido Proceso, el derecho a la Igualdad, el derecho al Trabajo y a la dignidad Humana.

SEGUNDO: Solicito respetuosamente, que su Señoría ordene se revoque la decisión tomada en la **Resolución número STTM-07016 del 22 de julio de 2015 “POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION”**.

TERCERO: Solicito respetuosamente, que su señoría ordene se revoque la decisión tomada en la RESOLUCIÓN STTM-2100-2015-03220 de fecha Mayo seis (6) del año dos mil quince (2015), expedida por la Secretaria de Tránsito y Transporte de Guadalajara de Buga – Valle, mediante la cual se declara a mi poderdante contravencionalmente “responsable por la violación al reglamento de tránsito en su artículo 131 Capítulo II Título IV de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 4 de la ley 1696 de 2013, infracción No. F la cual corresponde a **CONDUCIR BAJO EL INFLUJO DE ALCOHOL O BAJO LOS EFECTOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. CONDUCTA SANCIONADA CON LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 152 DE ESTE CÓDIGO**”. Al señor HARRY ANDRES RIVADENEIRA TORRES.

CUARTO: Se condene a la entidad demandada Por concepto de Daño Emergente en la suma dos millones de pesos, por concepto de Gastos de honorarios de abogados en los que el mi cliente ha tenido que incurrir

QUINTO: Se condene en costas a la entidad demandada.

PRUEBAS.

DOCUMENTALES:

- 1) RESOLUCIÓN STTM-2100-2015-03220 de fecha Mayo seis (6) del año dos mil quince (2015), expedida por la Secretaria de Tránsito y Transporte de Guadalajara de Buga – Valle.
- 2) Resolución número STTM-07016 del 22 de julio de 2015 “POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION”.
- 3) Copia de la orden de comparendo único nacional Nro. 76111000000008894280, de la libreta 149



- 4) Copia del formato de relación de comparendos, diligenciada por el agente de tránsito Uriel Sánchez de fecha 2 de noviembre de 2014.
- 5) Formato de solicitud de audiencia – proceso contravencional por inconformidad con el procedimiento.
- 6) Oficio del 18 de diciembre de 2014, donde se solicita la suspensión de licencia de conducción, sin haberse realizado la audiencia de pruebas del proceso contravencional.
- 7) Audiencia pública del proceso contravencional Nro. 58908 de fecha 31 de diciembre de 2015.
- 8) Pruebas aportadas por mi mandante. tales copia de tiquetes de vuelo documentos de identificación personal y del vehículo.
- 9) declaración juramentada del agente de tránsito URIEL SANCHEZ SATISABAL
- 10) Acta de conciliación de fecha 28 de Enero de 2016, a las 11:00 AM, expedida por el señor Procurador 60 Judicial I Para Asuntos Administrativos.
- 11) constancia de agotamiento de procedibilidad para acceder al jurisdicción contenciosa administrativa expedida el día 28 de Enero de 2016, expedida por el señor Procurador 60 Judicial I Para Asuntos Administrativos

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Fundamento esta petición en los artículos 1, 2, 5, ,11, 13, 42, 48, 49, y 86 de la Constitución Nacional, en concordancia con los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 del 2.000, éste último establece las reglas de competencia, razón por la cual presente ante usted esta acción constitucional.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES:

1.1. El Derecho Fundamental Al Debido Proceso.

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

*Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; **a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra;** a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.*



Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” (Negritas y Subrayado).

El carácter fundamental del debido proceso proviene de su estrecho vínculo, con el principio de legalidad al que deben ajustarse las autoridades judiciales y administrativas en la definición de los derechos de las personas, pues en defensa de los procedimientos en especial de ser oído, y controvertir las pruebas contrarios, o de que se les explique los derechos deberes y obligaciones que se tiene en una situación determinada.

14

El debido proceso comprende no solo la observancia de los pasos que la ley impone a los procesos judiciales y administrativos, sino al respeto propio de las formalidades de cada juicio, las cuales se encuentran consagradas en los principios generales que los inspiran, el tipo de interés en litigio, las calidades de los jueces y funcionarios a resolver.

Es importante recordar que el debido proceso es un conjunto de garantías que protegen a las personas, a efectos de asegurar durante el mismo una pronta y cumplida justicia.

1.2. Deber De Aplicación Uniforme De Las Normas Y La Jurisprudencia.

1.2.1 La ley 1437 de 2012, en su El artículo 10 **Estableció el Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia**, el cual ha establece que todas las autoridades judiciales y administrativas al momento de resolver los asuntos que le sean propios a su competencia, deben aplicará las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos, resaltando el propósito de adoptar decisiones que deban tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas.

1.2.2. Mediante sentencia C-634 de 2011, proferida de la Corte Constitucional se declaró exequible el artículo 10 de la ley 1437 de 2011, en el entendido que las autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y de manera preferente, las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia. Esto sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad.

1.2.3. Sentencia C-961 de Diciembre de 2014. De La Corte Constitucional.



La Honorable Corte Constitución en el fallo traído a colación reitera las garantías mínimas que se deben tener para la práctica de pruebas de alcoholemia las cuales habían sido esgrimidas en la Sentencia C-633 de 2014, las cuales me permito transcribir:

“... La realización de esta prueba con plenas garantías implica que las autoridades de tránsito deben informar al conductor de forma precisa y clara (i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, las diferencias entre ellas y la forma de controvertirlas, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (iv) el trámite administrativo que debe surtirse con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (v) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo que se inicia con la orden de comparendo y todas las demás circunstancias que aseguren completa información por parte del conductor requerido, antes de asumir una determinada conducta al respecto. En adición a ello la Corte precisa que el conductor tiene derecho a exigir de las autoridades de tránsito la acreditación (vi) de la regularidad de los instrumentos que se emplean y (vii) la competencia técnica del funcionario para realizar la prueba correspondiente...” (La negrilla y Subrayado fuera de texto).

15

2. FUNDAMENTO PROBATORIO

2.1. Falencias En El Acervo Probatorio.

Partiendo de la base jurídica de que los medios de prueba son los elementos o instrumentos utilizados por las partes o los sujetos procesales o por el funcionario judicial, que suministran o aportan las razones o los motivos para obtener la prueba y son ellos testimonios documentos, indicios; los cuales se utilizan para llevarle al fallador el conocimiento o la certeza de un hecho.

En virtud de lo anterior, respetuosamente manifiesto al despacho que el acto administrativo recurrido posee grandes falencias en el aspecto probatorio, las cuales me permito anunciarlas:

- a) Desde el inicio se ha vulnerado el debido proceso, en cuanto a la prueba documental y anticipada concerniente al dictamen de embriaguez se realizó sin garantías constitucionales en la humanidad de mi defendido.
- b) El dictamen no se realizó en formato que ha establecido el Instituto Nacional de Medicina Legal, en cumplimiento a la resolución 00414 de 2002, la cual es tenida como fundamento de derecho el acto administrativo recurrido.



- c) El dictamen médico legal por ser una prueba anticipada es materia de controversia, y el perito médico está en la obligación de explicar en audiencia, en virtud del principio del derecho de contradicción.
- d) Sin que se hubiese realizado la audiencia contravencional la Inspectoría de Tránsito Municipal de Buga, ya había pedido la elaboración de la resolución declarando contravencionalmente responsable al hoy inculcado, restándole importancia a los demás medios de prueba que demostrar la certeza de los hechos ocurridos.
- e) Las irregularidades cometidas por el agente de tránsito en el reporte de y entrega del comparendo, la cual es extemporánea, documentos todos que reposan en el expediente del presente proceso contravencional, y en el acto administrativo recurrido no hay ninguna observación al respecto.
- f) La gran confusión que evidencia el agente de tránsito URIEL SANCHEZ SATISABAL en su declaración juramentada, donde reitera la validez y legalidad del comparendo, dejando ver de manera clara que él se refería a otro procedimiento contravencional, por esta razón se refirió a mi representado el señor HARRY ANDRES RIVADENEIRA TORRES, como **ALBERIO INCAPIE SANCHEZ**, **QUIEN A TODAS LUCES ES UNA PERSONA TOTALMENTE DIFERENTE**, y no se puede alegar en este evento un yerro de transcripción en el nombre, porque el declarante también y aseguro haberlo llevado a la clínica urgencias médicas cuando en realidad el examen clínico a mi representado se lo practicaron en un centro de salud diferente (Clínica Guadalajara). Circunstancias que no permiten dar certeza de tiempo modo y lugar sobre los hechos que se le atribuyen a mi apoderado, tal como equivocadamente lo manifiesta el acto administrativo recurrido.
- g) Además decreto una prueba de oficio al citar al perito médico doctor DANIEL LADINO TAPASCO, prueba que nunca se practicó desconociendo a la fecha las razones.

Recordemos que el Artículo 187. Del C.P.C., establece que las pruebas "...deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos...", y realizado un estudio detenido del presente proceso contravencional, a todas luces se evidencia lo contrario.

Por otra parte el artículo 174 C.P.C., trata sobre la ***Necesidad de la prueba***: "...toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas **regular y oportunamente** allegadas al proceso": significa este artículo que toda providencia que decida algo debe hacerse con base en pruebas, regular y oportunamente allegadas al proceso. Pues es importante recordar que los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial, tienen que estar



demostrados con pruebas sin que el fallador pueda suplirlas con el conocimiento personal o privado que tenga sobre ellas, es decir, debe resolver según lo alegado y probado dentro del proceso. En otras palabras las pruebas NO pueden ser suplidas por el conocimiento privado del juez, debido tal situación atentaría contra los principios de **PUBLICIDAD Y CONTRADICCIÓN**. En estos casos puede el fallador decretar pruebas de oficio para demostrarlos, pero NO puede utilizar su mismo conocimiento para declararlos probados, sin necesidad de demostrar esos mismos hechos.

Este principio de la necesidad de la prueba se refiere a la necesidad de que los hechos sobre los cuales deba fundarse un fallo, estén acreditados con pruebas allegadas a la actuación, bien sea por los interesados o por el juez o por las diferentes autoridades administrativas. Por esta razón las pruebas se llevan al proceso en forma **regular**, quiere decir que **deben realizarse conforme a las normas y formas legales y practicarse dentro de los términos**.

Igualmente el código de procedimiento civil establece el PRINCIPIO DE LA UNIDAD DE LA PRUEBA (Art. 187 c.p.c.), Establece que no se pueden separar unas pruebas de otras, hay que apreciarlas en conjunto, dejando la libertad de valorar las pruebas según su conocimiento, pero sin desconocer las reglas de la sana crítica, por medio de este principio las distintas pruebas que forman parte del proceso y que pueden ser estimadas en su mérito, por el fallador; forman una unidad, de tal manera que NO se las puede analizar como elementos separados, ya que **debe confrontarlas** entre sí, puntualizar o **señalar su concordancia o los aspectos en que NO estén de acuerdo**, es decir, debe formarse de todo este acervo o conjunto, un **convencimiento global**.

Ahora bien el PRINCIPIO DE LA CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA tiene asidero jurídico en el artículo 29 Constitución Nacional, el cual es la base de los Artículos 4° y 13° del C.P.C., y según la doctrina este importante principio significa que la parte contra quien se opone una prueba debe gozar de oportunidad procesal para conocerla, es decir, que la prueba debe llevarse al proceso con conocimiento y audiencia de todas las partes.

COMPETENCIA Y CUANTÍA:

Es competencia de este despacho, por la naturaleza de la acción, por razón del territorio en donde el actor se le vulneró sus derechos fundamentales, y por la cuantía que se deriva de aquélla, la cual no excede de seis (6) salarios mínimos legales mensuales.



MANIFIESTACION BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento manifiesto al señor Juez administrativo, que mi poderdante conforme al poder conferido, no ha presentado demanda en contra del Municipio de Guadalajara de Buga por los mismos hecho, derecho y pretensiones.;

18

ANEXOS.

Poder al suscrito otorgado y los documentos aducidos como pruebas.

Guía de envío No 026000876181 de la empresa ENVIA, de la presente solicitud dirigida a la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga.

NOTIFICACIONES

Las del accionante el señor HARRY ANDRES RIVADENEIRA en la calle 21 # 9A – 55, de la ciudad de Guadalajara de Buga, celular 315 859 68 67.

A la entidad accionada ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA-SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE, en el terminal de transporte de esta municipalidad, segundo piso, oficina 207, teléfono 2375568, o en la carrera 13 # 6-50 piso uno, ventanilla única del Alcaldía Municipal.

Al suscrito en la calle 6 # 13-38 oficina 202 del edificio Banco de Bogotá de la ciudad de Guadalajara de Buga.

Atentamente:

HAROLD MAURICIO GARCIA ACEVEDO

CC.94.481.021 de Buga.

T.P. 204.433 DEL C.S.J.



RADICACION OFICINA JUDICIAL: _____

JUZGADO: **ADMINISTRATIVO**

19

CUANTIA. **\$ 6 SMLMV**

CLASE PROCESO: **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO**

DEMANDANTE: **HARRY ANDRES RIVADENEIRA TORRES**
CALLE 21 # 9A – 55,
CELULAR 315 859 68 67.
GUADALAJARA DE BUGA,

DEMANDADO: **M.PIO DE GUADALAJARA DE BUGA**
REPRESENTENTE LEGAL: DR. JULIAN
ANDRES LA TORRE HERRADA
CARRERA 13 # 6-50
DE BUGA

RADICACIÓN: -----

APODERADO **HAROLD MAURICIO GARCIA ACEVEDO**
C.C. No. 94.481.021 DE BUGA.
T.P. No. 204.433 del C.S.J

FIRMA:_____